

EL TRABAJO DEL CAPITAL. CÓMO SURGE EL BIENESTAR

Martin Rhonheimer¹

La desconfianza de la Iglesia católica frente a la libre empresa viene ya de antiguo. Ha llegado el momento de dejar atrás la idea de que existe un antagonismo entre capital y trabajo.

En su obra *Christliche Gesellschaftslehre*¹ el cardenal de Colonia Joseph Höffner, fallecido en 1987, se quejaba de que en Alemania los debates sociales estuviesen caracterizados por la incomprensión de la función del empresario. Lo achacaba, entre otras cosas, a la influencia de la idea marxista de un dualismo antagónico de capital y trabajo. También la doctrina social católica se ha ocupado con relativa poca frecuencia de lo específicamente empresarial, a lo que se añade que, en palabras de Höffner, “cuando se abordaba lo empresarial, solía hacerse con indisimulada desconfianza”. El cardenal añadía que, sin embargo, se había producido un cambio reconocido expresamente por el Vaticano II.

Desconfianza de la Iglesia frente a la actividad empresarial

Pero esto último solo es así hasta cierto punto. En efecto, si bien el Vaticano II elogia la actividad empresarial (en la *Gaudium et spes*, n.º 64), lo hace con reservas: sostiene que su finalidad fundamental “no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre”^{3*}. En esta formulación sigue percibiéndose con claridad la tradicional “indisi-

mulada desconfianza". Ese modo de consideración moralizante estaba presente ya años antes en la *Quadragesimo anno* (1931), donde leemos que "el empleo de grandes capitales para dar más amplias facilidades al trabajo asalariado [...] debe considerarse como la obra más digna de la virtud de la liberalidad" (n.º 51). En su comentario de la encíclica, publicado en 1932, su coautor Oswald von Nell-Breuning hablaba de la "virtud del empresario capitalista". Ahora bien, con la virtud nada tiene que ver la función del empresario, pues la suya es una función económica, y a ella se refería Höffner.

Encontramos una apreciación más adecuada de esa función económica cuatro años después del fallecimiento de Höffner en la encíclica *Centesimus annus* de Juan Pablo II (1991). En ella se considera el capitalismo como un sistema económico que "reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía" (n.º 42). En la medida en que esté enmarcado "en un sólido contexto jurídico" ese sistema económico se debe valorar positivamente, aunque sería más acertado —prosigue Juan Pablo II— denominarlo "economía de empresa", "economía de mercado" o simplemente "economía libre".

Ahí se argumenta de modo económico-funcional; el beneficio empresarial se reconoce en su fundamental función, e igualmente (en el n.º 32) la actividad intelectual del empresario como organizador e innovador creativo. Ya en la *Sollicitudo rei socialis* (1987) había subrayado Juan Pablo II la importancia de la actividad empresarial para la superación de la pobreza y había censurado "que en el mundo actual, entre otros derechos, es reprimido a menudo el derecho de iniciativa económica". Así, la consecuencia de equivocadas exigencias de igualdad es —añade esa encíclica— que "en lugar de la iniciativa creadora nace la pasividad, la dependencia y la sumisión al aparato burocrático" (n.º 15).

Esa estimación había superado una consideración de la actividad empresarial poco ilustrada económicamente y moralizante y había reflexionado sobre las condiciones institucionales y, sobre todo, jurídicas de la actividad empresarial capitalista que alcanza el éxito. No obstante, pronto se hizo perceptible, concretamente en la *Caritas et veritate*, publicada en 2009 por Benedicto XVI, una incipiente vuelta atrás: se hace valer contra la "lógica mercantil" el "bien común" y una economía de la "gratuidad"; el mercado libre, se dice, "no es ni debe convertirse en el ámbito donde el más fuerte

avasalle al más débil”, sino que se ha de articular e institucionalizar éticamente (n.º 36).

En la *Laudato si'* (números 128-129) el papa Francisco presenta ahora muy acertadamente la actividad empresarial como “noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos”. No obstante, al mismo tiempo exhorta a evitar “que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano” y considera que el avance tecnológico que lleva a “la disminución de los puestos de trabajo, que se reemplazan por máquinas” se vuelve contra el hombre (n.º 128). Por ello, la actividad empresarial —leemos ahí— es fecunda para una zona geográfica sobre todo “si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio” (n.º 129).

Búsqueda del beneficio y bien común

Así, tales textos siguen perpetuando la tradicional desconfianza de la Iglesia y su falta de comprensión frente a lo específicamente empresarial. A los empresarios que tienen éxito no les mueve el propósito de crear puestos de trabajo, y menos aún a costa del progreso tecnológico. Su objetivo es, antes bien, llevar al mercado productos que puedan vender. Es frecuente que en interés de la rentabilidad de la empresa, o incluso de su subsistencia, un empresario tenga que eliminar puestos de trabajo. El propósito de su actuación tampoco es fomentar el bien común, aunque en realidad este se fomenta principalmente por empresarios que tengan éxito y gestores que actúen empresarialmente y, con no poca frecuencia, precisamente debido a que abren camino al progreso tecnológico. La actuación empresarial quiere hacer realidad visiones empresariales y tiene por finalidad ganar dinero con ellas. La rentabilidad es su ley; su objetivo irrenunciable, el beneficio.

A su vez, este último no es el beneficio personal, el enriquecimiento personal, sino la rentabilidad: medios para ampliar el negocio, invertir en el futuro, llegar a ser o seguir siendo mejor y más innovador que la competencia. Y cuando se está “arriba del todo” y se es uno de los mejores del sector, o incluso el mejor y monopolista, lo que hay que hacer es mantener esa posición, defenderla contra los competidores sin cejar en el afán de innovación y optimización. La búsqueda del beneficio genera así competitividad e innovación y cumple —mientras actúe en el marco legal del Estado de Derecho— una función social. El beneficio indica que la



producción y los deseos de los consumidores coinciden. Por ello, la búsqueda del beneficio, cuando es racionalmente empresarial y no obedece a una irracional avidez, sirve al bien común, y los beneficios empresariales elevados son por regla general señal de gran creación de valor.

El “Occidente” industrializado, hoy rico, llegó a serlo gracias a empresarios e inversores que querían hacer negocio, pero que con ello mejoraron el nivel de vida de todos en una medida con la que ni siquiera los más ricos de épocas pasadas hubiesen podido soñar. Que durante los últimos decenios cientos de millones de personas del “tercer mundo” hayan escapado a la pobreza, el número de los que viven en pobreza extrema se haya reducido a la mitad y la distancia entre los países ricos y los pobres se haya ido acortando constantemente, ha sido la consecuencia —también en países con fuerte impronta de economía estatal, como China— de una actividad empresarial cada vez *más libre, de la economía de mercado y del comercio internacional con fronteras abiertas*.

Intereses comunes

¿Por qué son tan importantes los empresarios, los inversores, los capitalistas? En la sección sobre “Capital y trabajo” del comentario de Nell-Breuning a la *Quadragesimo anno* encontramos a ese respecto indicaciones inesperadas. A la tesis marxista de que el capital (propietarios del capital, empresarios) se apropia de modo explotador del valor añadido creado por el trabajo (del trabajador), Nell-Breuning opone: “Es productivo no solamente el trabajo de las manos, sino al menos en igual medida el trabajo de las cabezas. Si un pueblo quiere llegar al bienestar, una cosa es imprescindible: una enorme tensión del trabajo, tanto intelectual como físico, ‘tanto de los que dirigen cuanto de los que ejecutan’ (53)”.

En efecto, también existe el “trabajo del capital” —es decir, del empresario, del inversor, naturalmente también del inventor que se une a ellos o incluso es idéntico a ellos— y crea valor añadido “al menos en igual medida”. Ese trabajo del capital es una actividad mental, intelectual, organizativa, sin la cual la productividad del trabajador quizá solo fuese suficiente para mantenerle a duras penas con vida, y en el s. XIX ni siquiera hubiese bastado para ello. Esta percepción hace obsoleto el punto de vista marxista y “sindical” de que los capitalistas y empresarios defienden intereses estructuralmente opuestos a los intereses de los trabajadores.

No obstante, en Nell-Breuning faltaba un análisis económico del “trabajo del capital” y de su función, lo cual quizá explique su posterior giro a una posición de orientación sindical. En una conferencia titulada “¿Es la propiedad un poder ordenador?” presenta en 1958 al trabajador súbitamente como víctima “despojada de los medios de producción” de un “monopolio de clase” y como mero “apéndice” del capital. El economista y cultivador de la ética social católica Goetz Briefs, emigrado en 1934 a los EE.UU., reprochó a Nell-Breuning en una carta publicada póstumamente en 1976 que argumentase desde las premisas de la teoría del valor añadido marxista. En realidad, dice Goetz Briefs, el trabajador es el auténtico beneficiario de los “medios de producción capitalistas”, pues estos “apoyan y multiplican [...] su actividad” y le permiten participar, en forma de salarios reales crecientes, mejores condiciones de trabajo y elevación de su estatus social, de su “rendimiento económico y técnico”.

Ese es el punto decisivo. Obviamente, el empresario está “necesitado” de sus trabajadores; eso es trivial. Menos trivial es esto otro: si no hubiese empresarios e inversores, las personas “despojadas de los medios de producción”, por diligentemente que trabajasen, quizá solo estarían en condiciones de asegurar apenas su propia supervivencia. *Únicamente* gracias a la idea empresarial —que anticipa los deseos del consumidor y por ende las oportunidades del mercado— y a su puesta en práctica y al capital invertido en ella surge el valor añadido que incrementa progresivamente la productividad del trabajador “despojado de los medios de producción” y, por tanto, también su remuneración, lo cual le permite mejorar su nivel de vida y disfrutar de un bienestar general cada vez mayor.

La forma económica del dar

El valor económico de un producto no equivale, según todavía Marx estaba convencido, al trabajo empleado para obtenerlo, sino que viene determinado por la demanda que genera el producto en el mercado. Ahora bien, la demanda depende de preferencias subjetivas de los consumidores y determina el precio de mercado en función de la oferta o la escasez dadas. Por su parte, el empresario tiene que descubrir necesidades de los consumidores, estimarlas correctamente y —como un Henry Ford o un Steve Jobs— tener una visión y llevarla a la práctica. Por ello, sin la visión empresarial coronada por el éxito el trabajo de los trabajadores que fabrican



el producto carecería de valor. Esto es así incluso en el caso de empleados muy o máximamente cualificados: desde el especialista en tecnología de la información o software hasta el muy bien pagado titulado universitario dedicado a la investigación y el desarrollo. Incluso el trabajador que, en virtud de su elevado nivel de formación, realiza una aportación de especial magnitud al éxito empresarial necesita, para que su “capital humano” contribuya a la creación de valor, la inclusión en un proyecto empresarial que proporcione a su trabajo “valor de mercado”.

El capitalismo —según dijo George Gilder en 1981 en su libro *Wealth and Poverty*⁴— es la forma económica del dar. En él la riqueza y la propiedad privada no se emplean exclusivamente para el propio consumo (y quizá para limosnas, es decir, para el consumo de otras personas necesitadas), sino que se invierten productivamente en virtud de una idea empresarial. De ese modo la propiedad privada empieza a “trabajar” para el bien común al crear trabajo y generar pagos de salarios (y, por cierto, antes de que el empresario o el inversor vean su beneficio). Los salarios crean demanda monetaria de bienes, y esta hace que sea rentable la ulterior actuación empresarial consistente en invertir y producir. La creciente acumulación de capital permite en medida también creciente modos de producción innovadores, que a su vez crean nuevos tipos de trabajo, incrementan la productividad del trabajo y con ello, en la mayor parte de las ocasiones, también los salarios reales, lo cual refuerza la demanda de bienes cada vez mejores. El constante incremento de los salarios reales y la reducción de la jornada laboral, así como la paulatina desaparición del trabajo infantil, no se hicieron realidad sencillamente mediante leyes sociales o conflictos laborales sindicales. Bien es cierto que las leyes de protección de los trabajadores y la educación universal obligatoria pudieron contrarrestar las peores carencias y seguramente también generar presión para la innovación. Pero en último término el bienestar de las masas está basado solamente en el constante aumento de la productividad del trabajo: sin esta las leyes no serían aplicables y, por tanto, no habrían surtido efecto, o habrían obstaculizado la ulterior evolución. Este hecho histórico tiene validez también para el futuro: solo el crecimiento de la productividad permite niveles sociales más altos.

El proceso capitalista y de economía de mercado de la generación de bienestar presupone el marco de condiciones de un Estado de Derecho que funcione. Dado que la inseguridad es una característica esencial del trabajo empresarial, la existencia de claras reglas

jurídicas vigentes para todos y su respaldo efectivo por el Estado son imprescindibles, especialmente en el ámbito del Derecho de contratos y de la protección de los derechos de propiedad. Solo sobre esa base puede prosperar la actividad empresarial y pueden los mercados desempeñar su función de coordinación y de asignación de recursos y crear, como “procedimientos de descubrimiento” (Friedrich August von Hayek), innovación y bienestar.

Eso es así hasta hoy y se cumple también y especialmente —según ha mostrado el economista peruano Hernando de Soto— en los países en los que la desprotección de la propiedad y la corrupta burocracia estatal mantienen a las personas presas de la pobreza. En ellos al “ciudadano de a pie” le es imposible escapar mediante actividad empresarial a la economía de subsistencia. Pero el papel fundamental de la propiedad privada y del aseguramiento o concesión de derechos de propiedad como factores generadores de bienestar —y al mismo tiempo como claves de la solución de problemas económicos medioambientales— recibe en la doctrina social católica una atención hartamente insuficiente.

Parece que en muchas cabezas sigue surtiendo sus negativos efectos la idea de que existe un antagonismo de intereses entre “capital” y “trabajo”, de que en el capitalismo solamente puede hacerse rico quien quite algo a otros y de que la propiedad privada únicamente cumple su función social cuando se la grava con impuestos y se la redistribuye. Sucede lo contrario. A diferencia de lo que ocurre en el socialismo, en una economía capitalista de mercado solo puede hacerse rico quien también haga ricos a otros, quien produzca lo que sea útil a la gente (y ello, por cierto, conforme a sus preferencias subjetivas, que son el único criterio que tiene sentido en una sociedad libre ajena a paternalismos autoritarios).

Las expresiones “capitalismo” y “economía libre de mercado” no hacen referencia aquí, en modo alguno, al capitalismo clientelar o amiguista (*crony capitalism*) —realmente existente en muchos lugares, no solo en los EE.UU.— que surge de un entrelazamiento de política y economía y se basa en que la política, democráticamente legitimada, busca encauzar en una determinada dirección las fuerzas del mercado mediante leyes y regulaciones. Ello trae aparejado que grandes grupos empresariales, asociaciones sectoriales y grupos de interés se dediquen con todo el peso de su mayor fuerza económica y de sus más eficientes redes de contactos a hacer *lobbying* con éxito y, finalmente, unzan a su carro a los

reguladores (“captura del regulador”), en claro perjuicio de las empresas de menor envergadura.

Ese no es el capitalismo del que hablaban los representantes de la tradición liberal clásica, como Ludwig von Mises o von Hayek, y tampoco el mundo de la “destrucción creativa” innovadora y creadora de bienestar al que se refería Joseph Schumpeter. Ese capitalismo existió y sigue existiendo, y a pesar de todas las trabas que se le ponen su capacidad de generación de bienestar es colosal. Pero sus resultados se han visto y siguen viéndose obstaculizados y falseados por intervenciones estatales de todo tipo. Alfred Müller-Armack, que en su calidad de forjador de la noción de “economía social de mercado” es un testigo poco sospechoso, escribió esto en 1946 sobre ciertos procesos erróneos del pasado: “La investigación científica ha acreditado que las principales causas del fracaso de la economía liberal de mercado no residen en modo alguno tanto en ella misma cuanto en la distorsión que fue sufriendo progresivamente a causa del intervencionismo actuante desde fuera a partir de finales del siglo pasado”. Hoy nos encontramos en medio de una nueva fase de mercados manipulados por los políticos y por los bancos centrales, y por tanto guiados en la dirección errónea, a lo que se añade que para hacer frente a las consecuencias hemos puesto al lobo a cuidar de las ovejas.

El rumbo equivocado que marcan los políticos y los sindicatos

El proceso capitalista descrito, en el que se cumple el efecto *trickle-down* (“de derrame”) —frecuentemente no entendido, pero que es una ley irrefutable—, resulta obstaculizado por los políticos a menudo y gravemente, e incluso se le hace ir por caminos totalmente erróneos. Debido a la enorme magnitud del gasto público en porcentaje del PIB y a la fortísima carga impositiva, a la masiva redistribución y al no menos masivo endeudamiento público, a los estímulos equivocados que generan las ayudas sociales concedidas sin contraprestación alguna de su receptor, al proteccionismo y a las subvenciones de todo tipo y a las crisis financieras, como la de 2007/2008, causadas por los políticos, la legislación y regulaciones erradas, los aumentos de los salarios reales se derriten hasta quedar en nada. Con su política monetaria los bancos centrales emplean el veneno que fue una de las causas de la crisis (dinero barato, ahora incluso intereses negativos) como supuesto remedio

curativo, pero con ello agravan el problema de la deuda y hacen que muchos países pospongan una y otra vez reformas estructurales tan dolorosas como necesarias para un nuevo crecimiento y para innovar y crear puestos de trabajo. En lugar de ello producen nuevas burbujas, contribuyen a mantener con vida empresas que no son rentables y bancos ruinosos, y hacen a los ricos más ricos. Todo ello —así como también, por lo demás, la creación del euro, fracasado pero defendido cueste lo que cueste— no tiene nada que ver con la economía de mercado y el capitalismo, pero sí, y mucho, con la política. Es intervencionismo estatal, que los historiadores comentarán algún día llevándose las manos a la cabeza, según hacemos hoy con las múltiples necedades políticas de quienes nos precedieron.

La presión sindical desempeña a ese respecto un papel con frecuencia destructivo, *y ahí también andan en juego* el Estado y los políticos. Los sindicatos pueden contribuir como resultado de la libertad de asociación en el campo económico —que es un derecho fundamental— y como medio de presión intraempresarial de los trabajadores a mejorar las condiciones de trabajo, a elevar los salarios al nivel adecuado frente a empleadores tacaños y, así, también a mejorar el clima de trabajo y la productividad, pero siempre solo en la medida en que previamente se hayan creado las condiciones económicas precisas para ello. Si no están dadas, los conflictos laborales sindicales tienen por efecto lo contrario de un incremento del bienestar.

Los aumentos salariales forzados y a escala de todo un sector conducen en último término a un mayor desempleo en otros sectores de la economía, destruyen puestos de trabajo también en su propio sector, dado que hacen que sea rentable sustituir mano de obra humana por máquinas, e intensifican la presión inflacionaria, que merma o deja sin efecto alguno los incrementos salariales.

La Escuela de la Elección Pública (*Public Choice*) ha mostrado que no solamente los políticos, sino también los sindicalistas actúan por principio en su propio interés: en interés de sus liberados sindicales funcionarios y de los trabajadores de su sector, y a costa de todos los demás y, por tanto, del bien común. Regulaciones legales erróneas, así como también el interés de los políticos por utilizar conflictos para ensanchar su base electoral, estimulan adicionalmente a hacerlo. Así, bajo el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt la legislación hostil a la economía, que concedió a los sindicatos de ese país el derecho de ejercer coerción y un poder monopolístico en el mercado de trabajo, fue una de las principales

causas del fracaso del *New Deal*: a consecuencia de la artificial protección de los salarios nominales, y en ocasiones incluso de su aumento, el desempleo masivo existente en los EE.UU. no se pudo superar nunca hasta la entrada en la Segunda Guerra Mundial (en enero de 1939 seguía siendo del 17,4 por ciento!). La política de Roosevelt, que amplios sectores de la opinión pública consideraban social, le aseguró repetidas reelecciones. Por tanto, los políticos y los sindicatos estadounidenses fueron corresponsables de que la depresión iniciada con el *crash* bursátil de 1929 se convirtiese en la prolongada *Great Depression*, al igual que también en la *Great Recession* que sufren actualmente muchos países europeos las regulaciones del mercado laboral y otras medidas elogiadas como supuestos logros sociales implantadas de consuno con la presión sindical son las causas, junto a otros factores, de que persistan el elevado desempleo, el sobreendeudamiento y la debilidad del crecimiento.

El problema es la pobreza de las masas, no la desigualdad

Quizá el hecho de que los cultivadores de la ética social no suelen tener esos conocimientos sea la razón de que la tradicional desconfianza contra los empresarios y capitalistas esté tan difundida actualmente —sobre todo contra los que son más innovadores, tienen más éxito y por ello frecuentemente alcanzan también mayor magnitud y no rara vez han producido y producen enormes ganancias de bienestar— y quizá también por eso se confíe en aumentar la regulación y la intervención de los políticos.

Cabe preguntarse si el bienestar no sería hoy mucho mayor y estaría mejor repartido, y las personas poco cualificadas y los inmigrantes no tendrían más oportunidades de integrarse en el mercado laboral, si el dinamismo del capitalismo no se viese entorpecido por salarios mínimos específicos de sectores y ahora generales, convenios colectivos firmados bajo presión sindical y excesivas regulaciones laborales. Precisamente los más pobres son quienes salen más beneficiados por el capitalismo. No en vano son ellos los primeros favorecidos por la innovación, el crecimiento y el éxito empresarial.

Que la redistribución por el Estado social y los sindicatos desempeñasen un cometido central en la historia del surgimiento de nuestras actuales sociedades del bienestar, precisamente en Alemania, no demuestra que fuesen las fuerzas generadoras de

ese bienestar masivo. Lo que sí es seguro es que a consecuencia de una política intervencionista, obsesivamente reguladora, redistribuidora mediante los mecanismos del Estado social y al mismo tiempo también hostil al crecimiento, y frecuentemente en nombre de la “justicia social”, hoy estamos en Europa malbaratando el bienestar o manteniéndolo tan precaria como egoístamente, a costa de las siguientes generaciones. De poco sirven las lamentaciones colectivas, también cultivadas por los medios de comunicación, sobre la supuestamente creciente desigualdad social y la “pobreza relativa”. Quien solo se ocupe de ellas, difícilmente percibirá el real trasfondo de las cosas.

Precisamente desde una perspectiva cristiana combatir la desigualdad no puede constituir el objetivo primario. Si queremos contribuir a hacer realidad los deseos del papa Francisco, el auténtico objetivo tiene que ser la superación de la pobreza masiva y de las injusticias que mantienen a las personas presas de esa pobreza. Ahora bien, una de las mayores de esas injusticias es impedir a las personas, ya sean ricas o pobres, que desarrollen una actividad empresarial, de ese modo se hagan *más ricos y, así*, enriquezcan también a otras.

Notas

- 1 Este artículo se publicó originalmente en alemán por Herder Korrespondenz 70 en 2016, se tradujo al español y se publica aquí con los permisos correspondientes. Título original: “Die Arbeit des Kapitals”, Herder Korrespondenz 70 (2016), N. 10, pp. 32-36.
- 2 *Doctrina cristiana de la sociedad.*
- 3 Nota del traductor.: Los documentos conciliares o pontificios se citan por su traducción al español disponible en www.vatican.va.
- 4 *Riqueza y pobreza.*